

Cartagena. Abril 5 de 2022.

Doctor.

Alexander Gil Aguirre.

Juez Séptimo Penal Municipal de Cartagena.

E.S.D.

j07pmpalcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

ASUNTO: Incidente de desacato.

Fecha del fallo de tutela: 22 de junio de 2021.

Rad. No. 13001-40-04-007-2021-00111-00.

Actor: RAMON CASTILLO ALMEIDA.

Accionado: BBVA SEGUROS S.A.

RAMON CASTILLO ALMEIDA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.895.008., de Soplaviento, Bolívar, con domicilio y residencia en el barrio “San Fernando” Urbanización “Villas de la Mar”. MC.L.7., de esta misma ciudad, ante usted vengo en mi propio nombre, por medio del presente escrito, a promover un **INCIDENTE DE DESACATO** en contra el **BBVA SEGUROS S.A.**, de conformidad con lo estipulado en el art. 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, y con fundamento en los siguientes:

HECHOS:

1-Presenté una acción de tutela contra del **Banco BBVA** y *“la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.* por la presunta vulneración de mis derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la vida digna y a la seguridad social.

2-El trámite de esa solicitud de amparo constitucional le correspondió por reparto a ese Juzgado Séptimo Penal Municipal.

3-Mediante auto del pasado 9 de junio del 2021, el Juzgado admitió la demanda de tutela y solicitó a la accionada un informe sobre los hechos, a lo cual *el Banco BBVA señaló que no tenía que ver en el asunto, pues el asunto compete es a la aseguradora BBVA Seguros, entidad distinta del banco.*

4-Por su parte, la aseguradora *“la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.* se opuso a la prosperidad de la acción al señalar que fui reticente al tomar el seguro, ya que *“en este caso no se declararon las enfermedades arriba indicadas y, que de haberse reportado seguramente no se hubiese aceptado la expedición del seguro o hubiese quedado aplazada y supeditado a los resultados de los exámenes que la Compañía hubiese realizado, pero como declaró no padecer de ninguna afección o dolencia, se expidió la póliza como un riesgo normal”.*

5-El día 14 de febrero de la presente anualidad, el juzgado ras rebatir los argumentos de la accionada y con un juicioso y fundamentado criterio, profirió

fallo de tutela en contra de “*la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.*”, en la forma que así se transcribe:

Primero. Tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la vida digna y a la seguridad social del señor Ramón Castillo Almeida contra BBVA Seguros S.A., por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo. Ordenar a BBVA Seguros S.A. que en el término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo, realice los trámites correspondientes para hacer efectivo el amparo contenido en la póliza del Seguro Vida Grupo Deudor No. 0110043 (VGDB-154), contratada por el señor Ramón Castillo Almeida.

Tercero. Desvincular del presente trámite al Banco BBVA S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Cuarto. Notificar este fallo a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.

6-No obstante, los diferentes requerimientos hechos a la aseguradora para que le cumplimiento al fallo en los términos expuestos, hasta la fecha de la presentación del presente incidente, de manera injustificada y temeraria no le ha dado cumplimiento, incurriendo en consecuencia, en desacato al fallo judicial.

PETICIÓN:

Con base en los hechos narrados me permito solicitarle al despacho que, en los términos de ley, le ordene al contra BBVA Seguros S.A. proceda a darle inmediato cumplimiento al fallo de tutela de fecha **22 de junio de 2021**, o en su defecto, se le imponga la multa y la orden de arresto consagrada en los arts. 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

PRUEBAS:

Téngase como tal el expediente que obra en su juzgado con el radicado de la referencia, así como copia del fallo de fecha 22 de junio de 2021.

FUNDAMENTOS y RAZONES DE DERECHO:

Fundamento la anterior solicitud en el artículo 86 de la Constitución Política y en los arts. 52 y 53 de y los Decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992; Art 127 y concordantes del CGP.

CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN EL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL.

Sobre el tema, la corte en su sentencia T-554 de 1992, señalo:

(...)

*“El obligado cumplimiento de lo resuelto por los jueces y Tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo **tiempo**, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la Constitución.*

*La obligación de toda persona de cumplir la Constitución y las leyes (C.P. art. 95), se realiza – en caso de reticencia – a través de la intervención del poder judicial. **No es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme**, o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo.*

*La ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho (C.P. art. 1º) que se traduce en la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. **El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho.***

*El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos (C.P. art. 86 y 89) para impedir su auto destrucción. **Uno de ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas consagrado en el art. 29 de la Constitución.** (C.P. Preámbulo, art. 1, 2, 6, 29 y 86).*

*Los derechos procesales fundamentales no restringen su efectividad a la existencia de un proceso. Ellos incluyen tanto al derecho a acceder a la justicia (C.P. art. 228) como el derecho a la ejecución de la sentencia en firme (C.P. art. 1, 2 y 29). Lo contrario llevaría a restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, **convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ella reconocidos, en formas huera, carentes de contenido.***

*La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias **obliga a los jueces y Tribunales a adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad condenada al cumplimiento oportuno...*** (Negrillas fuera de texto).

Más adelante, en la sentencia T-553 de 1995, volvió a reiterar que:

*“...La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia – artículo 229 Superior -. Este se concreta no solo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, **sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento:** valga decir, en la aplicación de la normatividad en el caso concreto”.*

*“En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no solo vulnera los derechos que a través de esa última se han reconocido a quien invoco protección, sino que **desacata una decisión que hizo transito a cosa juzgada...**”.*

De ahí que haya seguido sosteniendo:

“Así, independientemente de las sanciones a que haya lugar, la autoridad judicial a quien corresponde velar por la eficacia y efectividad de la orden de tutela, está en la obligación —irrenunciable— de adelantar todas las gestiones pertinentes y de agotar cada uno de los mecanismos judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico, para lograr el objetivo de protección inmediata a que hace referencia

específica el artículo 86 superior. El cumplimiento y el desacato son en realidad dos instrumentos jurídicos diferentes, que a pesar de tener el mismo origen —la orden judicial de tutela— y tramitarse en forma paralela, en últimas persiguen distintos objetivos: el primero, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales afectados, y el segundo, la imposición de una sanción a la autoridad que ha incumplido el fallo.

En consecuencia, tratándose del cumplimiento de la sentencia, el juez analizará en cada caso concreto si se acató la orden de tutela o no, de manera que, si la misma no ha sido obedecida o no lo ha sido en forma integral y completa, aquel mantiene la competencia hasta lograr su cabal y total observancia, aun a pesar de estar agotado el incidente de desacato” (negrillas fuera de texto).

DIRECCION FISICA Y DIGITALES PARA LA ACTUACION Y NOTIFICACION DE LAS PARTES:

Actor: correo electrónico: monchoriginal@hotmail.com

Residencia: San Fernando” Urbanización “Villas de la Mar”. MC.L.7., de esta misma ciudad.

Celular: 310-746-5847.

Parte accionada: Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 12., Bogotá.

correo electrónico: clientes@bbvaseguros.com.co

Línea de atención al cliente Bogotá 307 80 80 Nacional 01 8000 934 020

Atentamente,

RAMON CASTILLO ALMEIDA.

CC. N° 19.895.008.

Celular: 310-746-5847.